

Las leyes de bandera roja muestran los límites del sistema legal

Los jueces pueden retirar las armas, pero no pueden exigir evaluaciones o tratamientos de salud mental.

PUNTOS CLAVE

Las leyes de bandera roja hacen posible que ciertas personas soliciten a la corte que retire el arma de fuego de alguien temporalmente.

Sin embargo, según las leyes de bandera roja, un tribunal no puede obligar a los sujetos de las peticiones a someterse a una evaluación de salud mental.

Ignorar estas limitaciones no nos acercará a brindar ayuda a las personas que experimentan crisis de salud mental.



Por [Lázaro Castillo Jr](#)

A medida que la legislación federal recién firmada busca instar a más estados a implementar leyes de bandera roja, han surgido preguntas sobre su efectividad algo limitada.

Específicamente, los tiroteos masivos en estados que ya han promulgado tales leyes ilustran que no son medidas de seguridad infalibles, aunque representan pasos en la dirección correcta.

El público reconoce en gran medida este desafío, pero nuestra ciudadanía y los legisladores deben comprender las razones por las que el problema es tan difícil de solucionar.

Las leyes de bandera roja hacen posible que ciertas personas (familiares, policías y/o médicos, según el estado) soliciten a la corte que retire el arma de fuego de alguien temporalmente. No importa si el individuo aún no ha violado ninguna ley.

Supongamos que un juez es persuadido por la evidencia presentada y determina que la persona representa un peligro para sí mismo o para los demás. En ese caso, se retira el arma y se impide legalmente que la persona compre otra. Nada más se requiere del individuo en cuestión. Es libre de seguir con su vida, a menudo repleto de problemas de salud mental y/o desafíos legales. Además, eventualmente puede recuperar el arma.

Como abogado de salud mental, veo las limitaciones de este tipo de medidas provisionales todos los días. Si bien es mejor que ninguna ley de este tipo, estas no ofrecen una protección adecuada al público ni ayudan a las personas en crisis.

Idealmente, un juez al que se le presente una petición de bandera roja debería tener la autoridad para exigir pasos clave hacia la estabilización y la recuperación, por ejemplo, ordenar que la persona se someta a una evaluación de salud mental y cumpla con el tratamiento de salud mental prescrito. Desafortunadamente, el tribunal no tiene poder para obligar a los sujetos de las peticiones porque son procedimientos civiles, no penales, y los individuos no han violado ninguna ley.

Este es el quid del desafío. Si bien nuestro sistema de justicia penal utiliza tribunales alternativos (es decir, tribunales de drogas, tribunales de familia, tribunales de salud mental, etc.), la mayoría son voluntarios. Las personas que enfrentan el encarcelamiento consienten en ser enviadas a estos tribunales porque ofrecen mejores alternativas que la prisión, por ejemplo, sobriedad, reunificación familiar y tratamiento obligatorio.

Pero si las personas no cumplen con los requisitos del tribunal de derivación, por ejemplo, someterse a un tratamiento de salud mental o de drogas, pueden ser remitidos de nuevo a un tribunal penal y posiblemente a la cárcel. La influencia que tienen estos tribunales sobre las personas que violan la ley los hace efectivos y beneficiosos.

Alternativamente, las leyes de bandera roja están diseñadas específicamente para permitir la intervención antes de que una persona haya violado una ley. Si bien estas medidas preventivas

y proactivas podrían ser cruciales para detener la ola actual de tiroteos masivos, no le dan al sistema judicial influencia para ayudar a las personas con problemas de salud mental y a sus familias a acceder a una intervención y un tratamiento significativos.

Todo esto sirve para ilustrar la importancia de hacer que medidas como las leyes de bandera roja sean más efectivas, reconociendo que no encajan perfectamente en el marco de nuestro modelo legal actual.

En mi opinión, la forma más directa de corregir este problema es permitir que los familiares de las personas en crisis den su consentimiento a los tribunales de salud mental en nombre de sus seres queridos después de cumplir con criterios estrictos. Para muchos, esta es una idea controvertida, ya que restringe las libertades personales de un individuo, aunque demasiados defensores de estas libertades en su forma más pura no logran comprender las duras realidades cotidianas de las personas y familias que luchan con graves problemas de salud mental.

Las condiciones de salud mental pueden impedir la autoconciencia y el sentido general de la realidad de las personas. Síntomas como pensamientos paranoicos y creencias delirantes pueden crear sentimientos de extrema desconfianza y hostilidad hacia aquellos que solo desean ayudarlos a mejorar y vivir una vida independiente.

Ignorar estas limitaciones no nos acercará a brindar ayuda real a las personas que experimentan crisis de salud mental, al igual que no ayudará ignorar las limitaciones de nuestro marco legal actual. La prevención de actos de violencia sin sentido requiere que todos nos comprometamos a pensar de manera más amplia.

Es hora de llamar a esto por su nombre: violencia sin sentido y muerte debido a nuestra incapacidad para identificar señales de advertencia en acciones y comportamientos. Es una ilusión creer que más leyes de bandera roja servirán como la única respuesta preventiva y proactiva para frenar los tiroteos masivos. Son un comienzo, pero sólo eso.

"La violencia es el miedo a los ideales de los demás". Mahatma Gandhi

[¿Cómo se ve el trastorno de personalidad antisocial en la vejez?](#)

[¿Cómo hacer frente a los tiroteos en la escuela?](#)

[Presión de grupo](#)

[¿La psicosis juega un papel en la mayoría de los tiroteos masivos?](#)